

DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

**PANAMÁ**

**PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN  
PANAMÁ**

**(PN-L1160)**

**PERFIL DE PROYECTO**

Este documento fue preparado por el equipo compuesto por: Carolina Freire (SCL/SPH), Jefe de Equipo; Emmanuelle Monin (SCL/SPH), Jefe alterna; Horacio Alvarez (SCL/EDU); Suzanne Duryea (SCL/GDI); Juan Pablo Salazar (SCL/GDI); Ana Grigera (SCL/GDI); Wilhelm Dalaison (INE/INE); Rosa Esperanza González (CDS/CCS); Marco Stampini (SCL/SPH); Neili Bermúdez (SCL/SPH); David Ochoa (VPC/FMP); Ezequiel Cambiasso (VPC/FMP); Wladimir Zanoni (SPD/SDV); Alvaro Sanmartín (LEG/SGO); Julia Miguez (VPS/ESG); Anabelle Wever (CID/CPN).

De conformidad con la Política de Acceso a Información, el presente documento está sujeto a divulgación pública.

## PERFIL DE PROYECTO

### PANAMÁ

#### I. DATOS BÁSICOS

<b>Nombre del Proyecto:</b>	Programa de Inclusión Social para Personas con Discapacidad en Panamá		
<b>Número de Proyecto:</b>	PN-L1160		
<b>Equipo de Proyecto:</b>	Carolina Freire (SCL/SPH), Jefe de Equipo; Emmanuelle Monin (SCL/SPH), Jefa alterna; Horacio Alvarez (SCL/EDU); Suzanne Duryea (SCL/GDI); Juan Pablo Salazar (SCL/GDI); Ana Grigera (SCL/GDI); Wilhelm Dalaison (INE/INE); Rosa Esperanza González (CDS/CCS); Marco Stampini (SCL/SPH); Neili Bermúdez (SCL/SPH); David Ochoa (VPC/FMP); Ezequiel Cambiasso (VPC/FMP); Wladimir Zanoni (SPD/SDV); Alvaro Sanmartín (LEG/SGO); Julia Miguez (VPS/ESG); Anabelle Wever (CID/CPN).		
<b>Prestatario:</b>	República de Panamá		
<b>Organismo Ejecutor:</b>	Secretaría Nacional de Discapacidad		
<b>Plan Financiero:</b>	BID (Capital Ordinario):	US\$	40.000.000
	Local:	US\$	2.000.000
	Total:	US\$	42.000.000
<b>Salvaguardias:</b>	Políticas activadas:	OP-703 (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, B11, B17); OP-704; OP-761; OP-765; OP-102	
	Clasificación:	B	

#### II. JUSTIFICACIÓN GENERAL Y OBJETIVOS

##### A. Justificación general

- 2.1 Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el 7,8% de la población panameña presenta algún tipo de discapacidad. La prevalencia es más alta en áreas rurales (8,8%) que en urbanas (7,6%). Entre las personas con discapacidad (PcD), las de mayor prevalencia son la visual (60,7%), física (caminar y/o usar brazo o manos, 38,3%), cognitiva (18,7%) y auditiva (16,0%). Ver [enlace](#)<sup>1</sup>. Según la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad (PENDIS) aplicada en 2006, el 60% de las PcD requiere de apoyo, siendo este mayor entre la población con discapacidad múltiple, visceral orgánica y psíquica, con una tasa que supera el 70%<sup>2</sup>. Según el Censo, los hogares que tienen al menos un integrante con discapacidad tienen una mayor probabilidad (6 p.p.) de estar en los dos quintiles más bajos de ingreso en comparación con hogares sin personas con discapacidad<sup>3</sup>. Las brechas educativas de esta población se evidencian en una mayor tasa de analfabetismo y menos años de escolaridad. El 12,6% de ellos entre 25 y 64 años no saben ni leer ni escribir, comparado con un 4,3% de la población sin discapacidad. Sólo el 42% de las PcD han completado la secundaria

<sup>1</sup> Muestra la cantidad de PcD por provincia y la prevalencia por tipo de discapacidad.

<sup>2</sup> Cálculos propios a partir de PENDIS 2006. Apoyo se refiere a ayudas técnicas o de otra persona.

<sup>3</sup> El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, que usa la escala de Washington para identificar a las PcD, contiene la información más reciente sobre discapacidad.

o algún nivel superior de escolaridad comparado con el 53,1% de las personas sin discapacidad, y sólo una de cada dos (48%) cuenta con seguridad social mientras que en las comarcas indígenas es una de cada cincuenta (1,9%). Esto limita su acceso a servicios de salud y a los beneficios de pensión por invalidez, vejez o muerte<sup>4</sup>.

- 2.2 La adopción en las últimas dos décadas de un conjunto de normativas ha favorecido la inclusión social de las PcD en Panamá<sup>5</sup>. La Ley de Equiparación de Oportunidades<sup>6</sup> reconoce a las PcD como un grupo de “interés social” y establece la obligación del Estado de crear las condiciones para su integración a la sociedad y el máximo desarrollo de sus capacidades. La adopción de la Convención sobre los Derechos de las PcD (CPDP) y su protocolo facultativo<sup>7</sup> ha contribuido a generar un cambio de paradigma respecto de la discapacidad, desde el modelo médico en el que las PcD son objetos pasivos de rehabilitación médica al modelo social en el que las PcD son entendidas como sujetos de derechos<sup>8</sup>. La creación en 2007 de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS)<sup>9</sup> cuya misión es ejecutar la política de inclusión, y del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS)<sup>10</sup> como ente articulador de la oferta institucional, establece un marco institucional para el diseño, implementación y supervisión de las políticas públicas de inclusión de las PcD.
- 2.3 Entre los avances también se destaca el sistema de certificación de la discapacidad cuyo objetivo es valorar la discapacidad y facilitar el acceso de las PcD a los beneficios que otorga la legislación nacional. El sistema está adherido al enfoque biopsicosocial utilizando la Clasificación Internacional de Funcionamiento (CIF) y de Enfermedades (CIE10). Para su implementación, la SENADIS ha formado Juntas Evaluadoras de Discapacidad y desarrollado la primera fase del Registro Nacional de Certificación (RENACER), sistema digital que agiliza este proceso.
- 2.4 A pesar de los avances, Panamá aún enfrenta desafíos para la inclusión de las PcD. Los retos principales fueron identificados por el Comité sobre los Derechos de las PcD<sup>11</sup> que, en su revisión de la aplicación nacional de la CPDP en 2017, destacó la necesidad de fortalecer el marco legal e institucional para garantizar

---

<sup>4</sup> PENDIS, 2006.

<sup>5</sup> El artículo 19 de la Constitución Política de Panamá establece que no habrá discriminación por razón de discapacidad.

<sup>6</sup> Ley 42 de 27 de agosto de 1999 y Ley 15 de marzo de 2016.

<sup>7</sup> La Ley No. 25 del 10 de julio de 2007 aprueba la CPDP y su Protocolo Facultativo.

<sup>8</sup> Agustín Huete García, Autonomía e Inclusión de las PcD en el ámbito de Protección Social, Resumen de Políticas No. IDB-PB-305, mayo 2019.

<sup>9</sup> La Ley 23 de 2007 establece a la SENADIS como una entidad autónoma con personería jurídica y autonomía, representada en el Órgano Ejecutivo por el MIDES.

<sup>10</sup> El Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad (CONADIS) fue creado mediante la Ley 23 de 2007. Es un organismo de consulta y apoyo de carácter interinstitucional e intersectorial, para garantizar el cumplimiento de los objetivos y fines que debe cumplir SENADIS. Lo preside el Presidente de la República, y está compuesto por los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Laboral, Vivienda, Gobierno y Justicia, Relaciones Exteriores, Obras Públicas y Economía y Finanzas, así como representantes del sector académico y la sociedad civil.

<sup>11</sup> El Comité de los Derechos de las PcD es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la CPDP, cuyo cumplimiento es vinculante. El Comité emitió recomendaciones al informe de Panamá (CRPD/C/PAN/1), en sus 336ª y 337ª sesiones del 15 y 16 de agosto de 2017 y aprobó recomendaciones en su 350ª sesión el 24 de agosto de 2017.

los derechos de las PcD, ampliar la certificación, expandir los servicios de salud, educación inclusiva y protección social y crear servicios que promuevan la autonomía.

- 2.5 **Fortalecimiento institucional.** La SENADIS evidencia debilidades en su rol como rector de las políticas de inclusión y proveedor de servicios, especialmente el proceso de certificación. La certificación de la discapacidad es un elemento clave para la inclusión al facilitar el acceso de las PcD a las ventajas dispuestas a través de la Ley 134 de mayo de 2013<sup>12</sup>. Sin embargo, la SENADIS ha certificado solo el 2% de las PcD<sup>13</sup>. Las comarcas indígenas son las más rezagadas debido a la ausencia de servicios institucionales, así como barreras geográficas y económicas<sup>14</sup>. Los desafíos para ampliar el sistema de certificación incluyen la falta de personal de salud para conformar las Juntas Evaluadoras, la centralización del proceso en la sede central debido a la falta de espacio físico, equipamiento tecnológico y recurso humano en las 9 direcciones regionales, y la ausencia de interoperabilidad entre sistemas de información. Ante la emergencia del COVID-19, se evidencia que la SENADIS carece de mecanismos para la protección y seguridad de las PcD en situaciones de riesgo, incluidas las emergencias humanitarias, pandemias y desastres naturales<sup>15</sup>.
- 2.6 **Salud y rehabilitación.** Panamá cuenta con el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal<sup>16</sup> coordinado por el Ministerio de Salud (MINSA) para la detección temprana de enfermedades que pueden derivar en la discapacidad. Sin embargo, existen brechas en su aplicación, dejando a aproximadamente el 27% de los nacidos vivos sin diagnóstico<sup>17</sup>. El 38% de los nacidos vivos en el país carecen del tamizaje metabólico, necesario para la detección temprana y tratamiento de enfermedades metabólicas que pueden causar parálisis cerebral o alteraciones a los órganos<sup>18</sup>. En tanto, solamente el 25% de los nacidos vivos cuentan con el tamizaje visual<sup>19</sup>. La ley panameña establece que la rehabilitación debe ser provista a todas las PcD, independientemente de su condición de aseguramiento. La Caja de Seguro Social (CSS) lo ofrece en sus policlínicas y hospitales, mientras que el Ministerio de Salud (MINSA) lo ofrece a través del Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación (INMFRE) en la capital y los Centros Reintegra en 8 provincias. La oferta estatal de rehabilitación se enfoca en la físico funcional, psico funcional, y terapia de lenguaje y ocupacional. La brecha de atención en los Centros Reintegra y el INMFRE a 2017 alcanza el 59%<sup>20</sup>. La rehabilitación

<sup>12</sup> La Ley 134 de 31 de diciembre de 2013 que establece la equiparación económica para las PcD otorga beneficios para el acceso a servicios públicos y privados incluyendo salud, educación, y protección laboral.

<sup>13</sup> Dado que es un proceso voluntario, ningún país ha alcanzado la certificación de la totalidad de su PcD. Como referencia, Argentina ha certificado al 34% de su PcD según su ENDIS 2018.

<sup>14</sup> En 2019, el 2% de las solicitudes para certificación de la discapacidad provinieron de las comarcas indígenas.

<sup>15</sup> El artículo 11 de la CPDP exige que los Gobiernos tomen las medidas para salvaguardar y proteger a las PcD en situaciones de emergencia o desastre.

<sup>16</sup> Ley No. 4 del 8 de enero de 2007.

<sup>17</sup> Ministerio de Salud, 2018

<sup>18</sup> Programa Nacional de Niñez y Adolescencia, MINSA, 2019.

<sup>19</sup> Plan Maestro de Salud durante la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia 2018-2025, MINSA, 2018

<sup>20</sup> Utilizando información de SENADIS del 2017, se atendieron a 44.468 PcD en los Centros Reintegra y a 76.514 PcD en el INMFRE dando un total de 120.982 PcD. Utilizando información la incidencia de discapacidad física (auditiva, visual, de movimiento y habla) según el Censo de 2010 y la estimación poblacional de la EPM de marzo 2017, se estimó el número de PcD física que requerirían de servicios de rehabilitación en 297.859.

enfrenta desafíos de cobertura y calidad incluyendo: (i) debilidad en la provisión de servicios en las áreas rurales y ausencia de servicios en las áreas indígenas donde tampoco existen modelos de rehabilitación basados en la comunidad; (ii) ausencia de estándares para la prestación de servicios al no existir una norma ni protocolos homogéneos de atención; y (iii) exclusión de Reintegra en la estructura administrativa y presupuestaria del MINSA<sup>21</sup>. Las PcD requieren de ayudas técnicas (sillas de ruedas, prótesis) para elevar su autonomía. El Fondo Rotativo de Discapacidad (FODIS) de la SENADIS, encargado de entregar ayudas técnicas a las PcD, tiene poco alcance y una baja cobertura. De las PcD que manifiestan necesitar una ayuda técnica<sup>22</sup>, tan solo 1,3% la han solicitado al FODIS. El programa ha entregado 28% de las ayudas técnicas solicitadas en los últimos 5 años por restricciones presupuestarias<sup>23</sup>.

- 2.7 **Protección Social.** Panamá cuenta con cuatro programas de transferencias económicas que mantienen entre sus beneficiarios a PcD en condición de pobreza. Tanto el Programa de Subsidios Económicos de la SENADIS y la Red de Oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) brindan US\$50 mensuales para enfrentar los gastos adicionales asociados con una discapacidad<sup>24</sup>. El programa Angel Guardián (AG) otorga US\$80 mensuales a 19.254 PcD severa en condición de dependencia y en pobreza extrema, y el programa 120 a los 65 otorga US\$65 a personas adultas mayores de 65 años sin seguridad social y en situación de pobreza. No obstante, los programas del MIDES y la SENADIS están desarticulados, toda vez que aplican instrumentos diferentes para medir discapacidad y pobreza y se carece de interoperabilidad en sus sistemas de información lo que podría generar duplicidades en la entrega de beneficios<sup>25</sup>. Los programas de ambas instituciones carecen de una oferta de servicios que garantice el seguimiento al estado de salud físico y mental de las PcD. Por ejemplo, de un total de 600 promotores con los que contaba el MIDES en 2017, actualmente mantiene 304 promotores para brindar acompañamiento a sus 194.440 beneficiarios, entre ellos las PcD. Para lograr mayor eficiencia en la gestión de los programas de protección social dirigidos a PcD, se requiere la homologación de los instrumentos de evaluación de pobreza y discapacidad, el fortalecimiento de sistemas de información de la SENADIS y de su interoperabilidad con el Registro Nacional de Beneficiarios del MIDES<sup>26</sup>, con el objetivo de realizar cruces de información para fines de verificación y

---

<sup>21</sup> Del total de 10 Centros Reintegra, 2 permanecen cerrados por falta de equipamiento y recurso humano. Los Centros no están dentro de la estructura administrativa del MINSA y sus regiones, motivo por el cual no le son asignadas partidas presupuestarias para su mantenimiento.

<sup>22</sup> Según PENDIS, 104.358 PcD necesitan una ayuda técnica externa.

<sup>23</sup> En los últimos tres años, FODIS ha obtenido únicamente el 14% de los recursos presupuestarios solicitados.

<sup>24</sup> Aunque la Red de Oportunidad se enfoca en entregar subsidios a familias en extrema pobreza con niños (menores de 18), la Resolución No. 544 de 14 de noviembre 2016 permite entregar el subsidio a PcD en pobreza extrema entre 18-64 años.

<sup>25</sup> La SENADIS implementa una evaluación social para valorar pobreza, y MIDES utiliza otros instrumentos para validar discapacidad y pobreza. Mediante la interoperabilidad de los sistemas de SENADIS y MIDES se podría verificar la potencial duplicación de beneficios y mejorar la coordinación de los programas de transferencia.

<sup>26</sup> El Registro Nacional de Beneficiarios desarrollado por el MIDES unifica el padrón de beneficiarios de los PTMC del Estado y apoya su gestión eficiente y transparencia. Su desarrollo es apoyado por el Programa de Inclusión y Desarrollo Social (PN-L1105) en ejecución.

coordinación, así como una ruta de atención para que los servicios de acompañamiento sean entregados oportunamente.

- 2.8 **Educación y deporte.** La norma nacional establece que el sistema educativo regular debe ofrecer enseñanza a todos los alumnos de forma inclusiva<sup>27</sup>. No obstante, Panamá mantiene una dualidad en la oferta de servicios educativos. Por un lado, el Instituto Panameño de Rehabilitación Especial (IPHE) atiende al 23% de los estudiantes con discapacidad en sus centros de educación especial y, por otro lado, el Ministerio de Educación (MEDUCA) brinda atención al restante 77% en el sistema regular. La cobertura de los servicios educativos es baja con solo el 33%<sup>28</sup> de PcD recibiendo servicios educativos a 2017, de los cuales el 75% está en áreas urbanas y 1% en las comarcas indígenas. Sólo el 15% de los centros educativos (y 2% en las comarcas) está habilitado con docentes capacitados para ofrecer recursos y apoyo. Adicionalmente, el 35% de los educadores dice carecer de capacitación o instrumentos para atender las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad<sup>29</sup>. En cuanto al deporte para las PcD, el IPHE realiza juegos inclusivos; sin embargo, la participación es reducida y no cubre todos los grupos de discapacidad. Asimismo, el Comité Paralímpico de Panamá presenta una estructura débil y poca participación regional; en los últimos Juegos de Río 2016 tan sólo dos atletas paralímpicos representaron al país.
- 2.9 **Autonomía.** La mayoría de las PcD reciben asistencia personal de sus familias (46%) o comunidad (1,1%), mientras que 11% no reciben ninguna asistencia<sup>30</sup>. La única Encuesta de Uso del Tiempo Libre de 2011 señala que el 69% de quienes cuidan a personas con necesidades de atención permanente son mujeres, lo que refleja un reparto desigual de género en las tareas de apoyo<sup>31</sup>. Además, Panamá no cuenta con un registro de personas que realizan actividades de asistencia a PcD. Entre las recomendaciones del CPDP a Panamá, se destaca la creación de una oferta estatal que impulse el esquema de vida independiente, incluyendo la asistencia personal<sup>32</sup>. La capacidad jurídica también favorece la autonomía de las PcD, al favorecer la toma independiente de sus decisiones, pero está limitada por leyes de tutela como el Código de la Familia, Código de Comercio y Código Civil<sup>33</sup>.
- 2.10 **Cambio climático.** Se prevé que la operación financie actividades relacionadas con la prevención del cambio climático incluyendo: (i) ganancias en eficiencia energética y reducción en el consumo de agua de las infraestructuras físicas programadas al introducir medidas de arquitectura bioclimática y la adquisición de

---

<sup>27</sup> Ley 42 de 1999 establece que las PcD se incluirán en el sistema educativo regular que debe proveer ayudas técnicas y apoyo. El Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de febrero/2000 norma la educación inclusiva.

<sup>28</sup> Estimación de cobertura en base al número de PcD en el sistema educativo, 15.053, y a la incidencia de discapacidad en la población de 4 y 29 años según el Censo 2010.

<sup>29</sup> Centro de Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, 2019.

<sup>30</sup> Según PENDIS 2006, el 39.6% de las PcD manifiesta no necesitar apoyo, mientras que el 46.6% reciben apoyo de sus familias, el 11.4% de nadie, el 1.1% de amigos o vecinos, el 0.9% no sabe o no responde, y el 0.5% lo recibe de una persona contratada.

<sup>31</sup> BID, WEF, Gobierno de Panamá. Diagnóstico y Plan de Acción para la Iniciativa de Paridad de Género en Panamá. 2018.

<sup>32</sup> CPDP emitió recomendaciones al informe de Panamá (CRPD/C/PAN/1), en sus 336ª y 337ª sesiones del 15 y 16 de agosto de 2017 y aprobó recomendaciones en su 350ª sesión el 24 de agosto de 2017.

<sup>33</sup> El Comité de la CPDP recomendó a Panamá derogar los artículos 404 a 407 del Código de la Familia, referencias en el Código de Comercio y el artículo 45 del Código Civil.

equipos con etiquetado de eficiencia energética; y (ii) reducción de combustibles fósiles debido a la digitalización del proceso de certificación, que reducirá los traslados necesarios para efectuar el trámite. Estos recursos contribuyen a la meta del Grupo BID de aumentar el financiamiento de proyectos relacionados con el cambio climático a un 30% de todas las aprobaciones de operaciones al 2020.

- 2.11 **Alineación estratégica.** El programa se alinea con el desafío de inclusión social e igualdad de la Segunda Actualización de la Estrategia Institucional del BID (AB-3190-2) al mejorar el acceso de las PcD a los servicios públicos. También se alinea con los temas transversales de: (i) capacidad institucional y estado del derecho al apoyar el fortalecimiento de la SENADIS e (ii) igualdad de género y diversidad al desarrollar un esquema de asistencia personal a PcD con alta participación de mujeres. También contribuye al Marco de Resultados Corporativos 2020 - 2023 (GN-2727-12) mediante: (i) beneficiarios que reciben servicios de salud; (ii) beneficiarios de programas destinados a combatir la pobreza; e (iii) instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas. Adicionalmente, el programa es consistente con el Marco Sectorial de Protección Social y Pobreza (GN-2784-7) al destacar la necesidad de fortalecer programas y políticas para la atención y cuidado de la población en situación de dependencia. Está alineado con la Estrategia del BID con Panamá 2015-2019 (GN-2838), específicamente con el objetivo estratégico de mejorar la prestación de servicios básicos a la población en situación de pobreza y fortalecer el perfil educativo de la población. Se alinea además con los hallazgos del CDC, en particular, mejorar la cohesión social y territorial mediante el fortalecimiento de las políticas de inclusión social para PcD o dependencia. A su vez, se alinea con programas de préstamo del sector social en ejecución en Panamá (4777/OC-PN, 3512/OC-PN). Adicionalmente, está alineado con el eje de combate a la pobreza y desigualdad del Plan Estratégico 2020-2024 del Gobierno de Panamá.

- B. **Lecciones aprendidas.** Para la construcción de infraestructuras en áreas indígenas, se toman en cuenta las recomendaciones de la Guía de Etnoingeniería (Perafán, 2005) elaborada por GDI para realizar adecuaciones ambientales y culturales de los diseños y mantener un diálogo cercano con las comunidades que asegure apropiación y mantenimiento de las obras. Se toman en cuenta también las lecciones aprendidas de la evaluación de la Estrategia del BID con Panamá 2015-2019 (GN-2838)<sup>34</sup> que identifica retrasos y altos costos asociados a la ejecución de intervenciones en zonas indígenas por lo que se adelantará la fase de estudios, diseño y elaboración de pliegos de la infraestructura en áreas indígenas con recursos de cooperación técnica (ATN/OC-17943-PN). En cuanto al Plan de Monitoreo y Evaluación, el programa tomará en cuenta las lecciones para el diseño de indicadores derivadas de la evaluación experimental de Escuelas Unificadas (ATN/JO-16122-PN). Respecto de la ejecución, se consideró el esquema de co-ejecución del Programa de Apoyo a la Inclusión de Personas con Discapacidad en Ecuador (4634/OC-EC) en el que cada Ministerio (Salud, Educación, Desarrollo Social y Vivienda) tiene autonomía administrativo-financiera y se mantienen 4 unidades ejecutoras. Este Programa estableció a la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida como coordinador para garantizar la continuidad de las políticas públicas y la implementación coordinada de las

---

<sup>34</sup> BID, Evaluación del Programa de País de Panamá 2015-2019: <https://publications.iadb.org/es/evaluacion-del-programa-de-pais-panama-2015-2019>

actividades. La experiencia de Ecuador contrasta con las lecciones derivadas de los préstamos liderados por instituciones como MIDES y MEDUCA (3512/OC-PN y 4357/OC-PN, respectivamente) en Panamá que carecen de las capacidades técnicas y operativas para garantizar un ritmo adecuado de ejecución, motivo por el cual se propone que la ejecución de esta operación sea liderada por la SENADIS, y se establezca en el CONADIS un Comité Estratégico de alto nivel para facilitar coordinación con las entidades sectoriales. Se tomó también la experiencia del Programa Panamá en Línea (3683/OC-PN) que, al tener un organismo ejecutor pequeño como la Agencia de Innovación Gubernamental (AIG) similar a la SENADIS, se logra un mayor empoderamiento institucional para el cumplimiento de los objetivos.

### **C. Objetivo y componentes**

- 2.12 **Objetivo.** El objetivo del programa es apoyar la inclusión social de PcD, mediante el fortalecimiento institucional de la SENADIS, la ampliación del acceso y calidad de los servicios de salud, rehabilitación, educación, deporte y protección social, y el desarrollo de modelos de atención que favorezcan la autonomía personal. Entre los resultados esperados se incluyen el aumento en la proporción de PcD certificadas; aumento en el número de niños con tamizaje auditivo, visual y metabólico; incremento en las atenciones brindadas a las PcD por los Centros Reintegra y modelos de rehabilitación basados en la comunidad; expansión de la proporción de estudiantes con discapacidad que cuentan con ajustes razonables.
- 2.13 **Componente 1. Fortalecimiento institucional (US\$5 millones).** Este componente tiene por objetivo incrementar la eficiencia y eficacia del sistema de certificación de la discapacidad y la efectividad de la respuesta nacional a la emergencia sanitaria por COVID-19. Se financiarán: (i) adecuaciones físicas internas, mobiliario, equipo tecnológico, y servicios de conectividad de la sede y de 9 oficinas regionales de la SENADIS a fin de expandir y descentralizar el sistema de certificación; (ii) programa de formación de personal multidisciplinario para integrar las Juntas Evaluadores de la Discapacidad; (iii) ampliación de las funcionalidades de RENACER y el desarrollo de interfases que permitan su interoperabilidad con el Registro Nacional de Beneficiarios a fin de evitar duplicidades en la entrega de transferencias y facilitar la coordinación en la prestación de servicios; y (iv) el diseño de un Plan Nacional de Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias.
- 2.14 **Componente 2. Apoyo a la expansión de servicios de salud y rehabilitación (US\$18 millones).** El objetivo de este componente es ampliar el diagnóstico temprano de la discapacidad y mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud y rehabilitación para las PcD. Se financiará: (i) la expansión del tamizaje auditivo, visual y metabólico mediante la adquisición de pruebas y equipamiento; (ii) adecuaciones físicas y equipamiento de tres Centros Reintegra, la creación de uno en la Comarca Ngäbe Buglé, y adecuaciones a la estructura administrativa de los Centros Reintegra para su incorporación a las Direcciones Regionales del MINSA; (iii) creación de un sistema nacional de rehabilitación con normas y protocolos homogéneos de atención; (iv) diseño e implementación de un modelo que brinde servicios de salud, rehabilitación y capacitación a familias y comunidades, enfocado en las PcD beneficiarias de los Programas de



Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC); y (v) la ampliación del FODIS mediante la adquisición y distribución oportuna de ayudas técnicas de calidad.

- 2.15 **Componente 3. Fortalecimiento de la educación y deporte inclusivos (US\$5 millones).** Este componente tiene por objetivo fortalecer la cobertura y pertinencia de la educación formal dirigida a PcD mediante: (i) plan de capacitación sobre inclusión y ajustes razonables para docentes y directivos escolares<sup>35</sup>; (ii) plan de acompañamiento y asesoramiento para la elaboración de ajustes razonables; (iii) habilitación de aulas de recursos para estudiantes con discapacidad en centros educativos y universidades de áreas rurales e indígenas; (iv) actualización del marco normativo que regula la educación especial; y (v) formación de líderes locales sobre deporte paralímpico.
- 2.16 **Componente 4. Apoyo a la capacidad jurídica y autonomía de las PcD (US\$10 millones).** El objetivo de este componente es implementar un modelo de asistencia personal para PcD mediante: (i) el diseño e implementación del primer modelo para PcD con altas necesidades de apoyo, en calidad de piloto. El modelo incluirá un registro de asistentes personales, programa de formación, normas y estándares de calidad y un esquema de incentivos; y (ii) el desarrollo de un marco normativo y sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las PcD.
- 2.17 **Gestión del Proyecto (US\$4 millones).** Se financiarán las necesidades administrativas, financieras, de auditoría financiera, ambiental y de procesos, y supervisión relacionadas a la gestión del proyecto, y se llevarán a cabo evaluaciones del impacto de la operación en la inclusión de los estudiantes con discapacidad en la comunidad educativa incluyendo directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, así como la autonomía y auto determinación de las personas con discapacidad. El aporte local financiará los costos relacionados con la contratación del personal de la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) incluyendo personal de coordinación, adquisiciones, finanzas, monitoreo, arquitectura, ingeniería, y especialistas ambientales y sociales, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas físicas y financieras del Programa, y de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales.
- 2.18 **Focalización y beneficiarios.** El proyecto será focalizado geográficamente en las áreas rurales e indígenas del país, la cual abarca 8 provincias y 3 comarcas indígenas con una población beneficiaria potencial de 106.521. Dentro de las provincias y comarcas, se focalizarán las inversiones en los distritos con mayor prevalencia de discapacidad y pobreza, en alineamiento con el Plan Colmena<sup>36</sup>. No obstante, la ampliación del sistema de certificación es universal, y beneficiaría a 317.391 PcD.

---

<sup>35</sup> Ajustes razonables se refiere a las adaptaciones, apoyos, recursos o modificaciones del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante que se implementan tras una evaluación de las características del estudiante con discapacidad.

<sup>36</sup> El Plan Colmena es una estrategia de reducción de la pobreza impulsada por el Gobierno Nacional y coordinada por el Gabinete Social que busca organizar territorialmente la implementación integral de la oferta multisectorial articulada que garantice a la población el derecho al desarrollo. Abarca 300 corregimientos en situación de pobreza multidimensional.

### III. ASPECTOS TÉCNICOS Y CONOCIMIENTO DEL SECTOR

- 3.1 **Esquema de ejecución.** El Programa se estructura como préstamo de inversión específica por un monto de US\$40 millones del Capital Ordinario del BID y será ejecutado en 5 años por el MIDES, a través de la SENADIS. Se conformará una Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) en la SENADIS para la ejecución del Programa, que dependerá de la máxima autoridad institucional y será responsable de las actividades de planificación, gestión, adquisiciones y monitoreo. Se prevé la firma de convenios interinstitucionales entre la SENADIS y el MINSA, MEDUCA y MIDES estableciendo las responsabilidades de cada parte dentro de la ejecución del préstamo, específicamente la provisión de insumos técnicos para asegurar la ejecución de las actividades descritas. Se propone la creación de un Comité Estratégico de alto nivel coordinado desde el CONADIS para facilitar la implementación de dichos convenios. Durante la preparación de la propuesta de préstamo se aplicará la Plataforma de Análisis de Capacidad Institucional (PACI) para determinar fortalezas y desafíos que presente la institución.
- 3.2 La información de PENDIS y del Censo Nacional de 2010 no refleja las brechas actuales en el acceso a servicios sociales. Como parte del trabajo técnico de preparación de la operación, se realizará, con financiamiento de la Cooperación Técnica de Apoyo al Fortalecimiento de Políticas y Acceso a Programas de Inclusión Social de PcD (ATN/OC-17943-PN): (i) análisis de las barreras para la inclusión social y económica de las PcD; (ii) análisis de reformas legales para el cumplimiento a las recomendaciones del Comité de CDPD; (iii) la viabilidad económica de las intervenciones propuestas; y (iv) análisis de la capacidad institucional y fiduciaria de la SENADIS.

### IV. RIESGOS AMBIENTALES Y ASPECTOS FIDUCIARIOS

- 4.1 **Riesgos Ambientales.** La operación ha sido clasificada como Categoría B bajo la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703). Las obras previstas corresponden a la construcción de un Centro Reintegra en la Comarca Ngäbe Buglé y la adecuación física de tres centros adicionales, que son obras menores. La Política sobre Gestión de Riesgo de Desastres (OP-704) clasifica el riesgo de desastres naturales como bajo. Dado que los beneficiarios de los cuatro componentes incluyen población indígena, se seguirán los lineamientos de la Política de Pueblos Indígenas (OP-765) y se realizarán consultas públicas conforme a OP-703 y OP-765. Para mayor información, revisar la Estrategia Ambiental y Social en el Anexo III.
- 4.2 **Otros riesgos.** Los riesgos identificados están detallados en el Apéndice II Matriz de riesgos.
- 4.3 **Aspectos Fiduciarios.** Las adquisiciones seguirán las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID (GN-2349-15) y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el BID (GN-2350-10).

### V. RECURSOS Y CRONOGRAMA DE PREPARACIÓN

- 5.1 El Anexo V detalla el cronograma de preparación y establece los hitos para la distribución del POD a QRR (07/09/2020), aprobación por el Comité de Políticas Operativas (08/12/2020) y por el Directorio (09/16/2020). El costo estimado de la preparación para misiones es US\$15.000 y US\$65.000 para consultorías.

CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).



# Safeguard Policy Filter Report

## Operation Information

Operation		
PN-L1160 Social Inclusion Program for People with Disabilities in Panama		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B		
Country	Executing Agency	
PANAMA	PN-SPA - Senadis Panama	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Social Protection & Health	POVERTY ALLEVIATION	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
CAROLINA ANGELICA FREIRE SAMUDIO	JULIA MIGUEZ MORAIS	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$40,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
2 Apr 2020	juliami ESG Primary Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	20 Apr 2020	
QRR (Estimated)	17 Jul 2020	
Board Approval (Estimated)	16 Sep 2020	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		

## Safeguard Policy Items Identified

### B.1 Bank Policies (Access to Information Policy– OP-102)

The Bank will make the relevant project documents available to the public.

### B.1 Bank Policies (Disaster Risk Management Policy– OP-704)

The operation is in a geographical area exposed to [natural hazards \(Type 1 Disaster Risk Scenario\)](#). Climate change may increase the frequency and/or intensity of some hazards.



# Safeguard Policy Filter Report

## B.1 Bank Policies (Gender Equality Policy– OP-761)

The operation will offer opportunities to promote [gender equality](#) or [women's empowerment](#).

## B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)

The operation has the potential to negatively affect indigenous people (also see [Indigenous Peoples Policy](#)).

## B.1 Bank Policies (Indigenous People Policy– OP-765)

The operation will offer opportunities for indigenous people

## B.2 Country Laws and Regulations

The operation is expected to be in compliance with laws and regulations of the country regarding specific women's rights, the environment, gender and indigenous peoples (including national obligations established under ratified multilateral environmental agreements).

## B.3 Screening and Classification

The operation (including [associated facilities](#)) is screened and classified according to its potential environmental impacts.

## B.5 Environmental Assessment Requirements

An environmental assessment is required.

## B.6 Consultations

Consultations with affected parties will be performed equitably and inclusively with the views of all stakeholders taken into account, including in particular: (a) equal participation by women and men, (b) socio-culturally appropriate participation of indigenous peoples and (c) mechanisms for equitable participation by vulnerable groups.

## B.7 Supervision and Compliance

The Bank is expected to monitor the executing agency/borrower's compliance with all safeguard requirements stipulated in the loan agreement and project operating or credit regulations.

## B.10. Hazardous Materials

The operation has the potential to impact the environment and occupational health and safety due to the production, procurement, use, and/or disposal of hazardous material, including organic and inorganic toxic substances, pesticides and persistent organic pollutants (POPs).

## B.11. Pollution Prevention and Abatement

The operation has the potential to pollute the environment (e.g. air, soil, water, greenhouse gases).

## B.17. Procurement

Suitable safeguard provisions for the procurement of goods and services in Bank financed operations may be incorporated into project-specific loan agreements, operating regulations and bidding documents, as appropriate, to ensure environmentally responsible procurement.



## Safeguard Policy Filter Report

### Potential Safeguard Policy Items

#### [B.4 Other Risk Factors](#)

The borrower/executing agency exhibits weak institutional capacity for managing environmental and social issues.

### Recommended Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR. The project triggered the Disaster Risk Management policy (OP-704) and this should be reflected in the Project Environmental and Social Strategy. A Disaster Risk Assessment (DRA) may be required (see Directive A-2 of the DRM Policy OP-704). Next, please complete a Disaster Risk Classification along with Impact Classification. Also: if the project needs to be modified to increase resilience to climate change, consider the (i) possibility of classification as adaptation project and (ii) additional financing options. Please consult with INE/CCS adaptation group for guidance.

### Additional Comments

[No additional comments]



## Safeguard Screening Form

### Operation Information

Operation		
<b>PN-L1160</b> Social Inclusion Program for People with Disabilities in Panama		
Environmental and Social Impact Category	High Risk Rating	
B		
Country	Executing Agency	
PANAMA	PN-SPA - Senadis Panama	
Organizational Unit	IDB Sector/Subsector	
Social Protection & Health	POVERTY ALLEVIATION	
Team Leader	ESG Primary Team Member	
CAROLINA ANGELICA FREIRE SAMUDIO	JULIA MIGUEZ MORAIS	
Type of Operation	Original IDB Amount	% Disbursed
Loan Operation	\$40,000,000	0.000 %
Assessment Date	Author	
2 Apr 2020	juliami ESG Primary Team Member	
Operation Cycle Stage	Completion Date	
ERM (Estimated)	20 Apr 2020	
QRR (Estimated)	17 Jul 2020	
Board Approval (Estimated)	16 Sep 2020	
Safeguard Performance Rating		
Rationale		

### Operation Classification Summary

Overriden Rating	Overriden Justification
Comments	





## Safeguard Screening Form

### Conditions / Recommendations

Category "B" operations require an environmental analysis (see Environment Policy Guideline: Directive B.5 for Environmental Analysis requirements)

The Project Team must send to ESR the PP (or equivalent) containing the Environmental and Social Strategy (the requirements for an ESS are described in the Environment Policy Guideline: Directive B.3) as well as the Safeguard Policy Filter and Safeguard Screening Form Reports. These operations will normally require an environmental and/or social impact analysis, according to, and focusing on, the specific issues identified in the screening process, and an environmental and social management plan (ESMP). However, these operations should also establish safeguard, or monitoring requirements to address environmental and other risks (social, disaster, cultural, health and safety etc.) where necessary.

### Summary of Impacts / Risks and Potential Solutions

Generation of solid waste is [moderate](#) in volume, does not include [hazardous materials](#) and follows standards recognized by multilateral development banks.

**Solid Waste Management:** The borrower should monitor and report on waste reduction, management and disposal and may also need to develop a Waste Management Plan (which could be included in the ESMP). Effort should be placed on reducing and re-cycling solid wastes. Specifically (if applicable) in the case that national legislations have no provisions for the disposal and destruction of hazardous materials, the applicable procedures established within the Rotterdam Convention, the Stockholm Convention, the Basel Convention, the WHO List on Banned Pesticides, and the Pollution Prevention and Abatement Handbook (PPAH), should be taken into consideration.

Likely to have [minor](#) to [moderate](#) emission or discharges that would negatively affect [ambient environmental conditions](#).

**Management of Ambient Environmental Conditions:** The borrower should be required to prepare an action plan (and include it in the ESMP) that indicates how risks and impacts to ambient environmental conditions can be managed and mitigated consistent with relevant national and/or international standards. The borrower should (a) consider a number of factors, including the finite assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, the project's proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative impacts with uncertain and irreversible consequences; and (b) promote strategies that avoid or, where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants, including strategies that contribute to the improvement of ambient conditions when the project has the potential to constitute a significant source of emissions in an already degraded area. The plan should be subject to review by qualified independent experts. Depending on the financial product, this information should be referenced in appropriate legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.).

The negative impacts from production, procurement and disposal of [hazardous materials](#) (excluding POPs unacceptable under the Stockholm Convention or toxic pesticides) are [minor](#) and will comply with relevant national legislation, [IDB requirements on hazardous material](#) and all applicable International Standards.

**Monitor hazardous materials use:** The borrower should document risks relating to use of hazardous materials and prepare a hazardous material management plan that indicates how hazardous materials will be managed (and community risks mitigated). This plan could be part of the ESMP.

The project has or will have [minor](#) negative impacts on [Indigenous Peoples](#).

**Mitigation Framework:** Include specific mitigation measures as needed in consultation with affected IPs. Consult with Indigenous Peoples specialist. Incorporate measures in legal documentation (covenants, conditions of disbursement, etc.). Include mitigation measures as part of overall environmental and social management plans or provisions.

The project is located in an area prone to [inland flooding](#) and the likely severity of the impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. This must take into consideration changes in the frequency and intensity of intensive rainfall and in the patterns of snowmelt that could occur with climate change. The DRMP includes risk reduction measures (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as the financial protection (risk transfer, retention) of the project. The DRM Plan takes into account existing vulnerability levels and coping capacities, the area's disaster alert and prevention system, general design standards, land use regulations and civil defense recommendations in flood prone areas. However, the options and solutions are sector- and even case-specific and are selected based on a cost analysis of equivalent alternatives.

The project is located in an area prone to [landslides](#) and the likely severity of the impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take into account the country's disaster alert and prevention system, general design standards and other related regulations.

The project is located in an area prone to [earthquakes](#) and the likely severity of impacts to the project is [moderate](#).

A Disaster Risk Assessment, that includes a Disaster Risk Management Plan (DRMP), may be necessary, depending on the complexity of the project and in cases where the vulnerability of a specific project component may compromise the whole operation. The DRMP should propose measures to manage or mitigate these risks to an acceptable level. The measures should consider both the risks to the project, and the potential for the project itself to exacerbate risks to people and the environment during construction and operation. The measures should include risk reduction (siting and engineering options), disaster risk preparedness and response (contingency planning, etc.), as well as financial protection (risk transfer, retention) for the project. They should also take into account the country's disaster alert and prevention system, general seismic design standards and other related regulations.

## Disaster Risk Summary

Disaster Risk Level

**Moderate**

Disaster / Recommendations

The reports of the Safeguard Screening Form (i.e., of the Safeguards Policy Filter and the Safeguard Classification) constitute the Disaster Risk Profile to be included in the Environmental and Social Strategy (ESS). The Project Team must send the PP (or equivalent) containing the ESS to the ESR.

The Borrower prepares a Disaster Risk Management Summary, based on pertinent information, focusing on the specific moderate disaster and climate risks associated with the project and the proposed risk management measures. Operations classified to involve moderate disaster risk do not require a full Disaster Risk Assessment (see Directive A-2 of the DRM Policy OP-704).

The Project Team examines and adopts the DRM summary. The team remits the project risk reduction proposals from the DRMP to the engineering review by the sector expert or the independent engineer during project analysis or due diligence, and the financial protection proposals to the insurance review (if this is performed). The potential exacerbation of risks for the environment and population and the proposed risk preparedness or mitigation measures are included in the Environmental and Social Management Report (ESMR), and are reviewed by the ESG expert or environmental consultant. The results of these analyses are reflected in the general risk analysis for the project. Regarding the project implementation, monitoring and evaluation phases, the project team identifies and supervises the DRM approaches being applied by the project executing agency.

Climate change adaptation specialists in INE/CCS may be consulted for information regarding the influence of climate change on existing and new natural hazard risks. If the project requires modification or adjustments to increase its resilience to climate change, consider (i) the possibility of classification as an adaptation project and (ii) additional financing options. Please consult the INE/CCS adaptation group for guidance.

## Disaster Summary



## Safeguard Screening Form

### Details

The project is classified as moderate disaster risk because of the likely impact of at least one of the natural hazards is average.

### Actions

Operation has triggered 1 or more Policy Directives; please refer to appropriate Directive(s). Complete Project Classification Tool. Submit Safeguard Policy Filter Report, PP (or equivalent) and Safeguard Screening Form to ESR.

<b>Estrategia Ambiental y Social (EAS)</b>	
<b>Nombre de la Operación</b>	Programa de Inclusión Social para Personas con Discapacidad en Panamá
<b>Número de la Operación</b>	PN-L1160
<b>Preparado por</b>	Julia Míguez Morais (VPS/ESG)
<b>Detalles de la Operación</b>	
<b>Sector del BID</b>	SCL/SPH
<b>Tipo de Operación</b>	Préstamo de Inversión
<b>Clasificación Ambiental y Social</b>	B
<b>Indicador de Riesgo de Desastres</b>	Moderado
<b>Prestatario</b>	República de Panamá
<b>Agencia Ejecutora</b>	Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS)
<b>Préstamo BID US\$ (y costo total del proyecto)</b>	BID: US\$ 40.000.000 Local: US\$ 2.000.000 Total: US\$ 42.000.000
<b>Políticas/Directrices Asociadas</b>	OP-703 (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10, B11, B17); OP-704; OP-761; OP-765; OP-102
<b>Descripción de la Operación</b>	
<p>El objetivo del programa es apoyar la inclusión social de las personas con discapacidad<sup>1</sup> (PcD), especialmente en las áreas rurales e indígenas, mediante el fortalecimiento institucional, la ampliación del acceso y la calidad de los servicios de salud, rehabilitación, educación y protección social para las PcD, y el apoyo a modelos de atención que favorezcan la autonomía personal. Entre los resultados esperados se incluyen el aumento del número de PcD certificadas, el aumento del número de tamizajes en niños, el aumento en la cobertura de PcD que reciben servicios de salud, educación y rehabilitación en su territorio, así como la expansión en la cobertura de ayudas técnicas y servicios de asistencia personal. Consta de cuatro componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Componente 1: Fortalecimiento institucional.</b> Este componente tiene por objetivo fortalecer a la SENADIS en su doble rol como rector de la política de inclusión y responsable del proceso de certificación de las discapacidades a nivel central y regional aumentando su capacidad de ejecución. Para esto, serán financiados: (i) adecuaciones físicas internas de las oficinas, adquisición de equipo tecnológico, servicios de conectividad y mobiliario para las oficinas centrales y regionales de la SENADIS; (ii) programa de formación de personal médico para integrar las Juntas Evaluadores de la discapacidad; (iii) ampliación de la capacidad, interoperabilidad con el Registro Nacional de Beneficiarios y funcionalidades del RENACER para mejorar la eficiencia, cobertura y transparencia del proceso de certificación.</li> <li>▪ <b>Componente 2. Apoyo a la expansión de servicios de salud y rehabilitación.</b> Este componente fortalecerá el diagnóstico temprano de la discapacidad y mejorará la cobertura y calidad de los servicios de salud y rehabilitación. Se financiará: (i) la expansión del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal mediante la adquisición de pruebas y equipamiento; (ii) adecuaciones físicas y equipamiento de tres Centros Reintegra en áreas rurales, la creación de uno en la Comarca Ngäbe Buglé, y el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Direcciones Regionales de Salud para que integren estas instalaciones a su red; (iii) creación de</li> </ul>	

<sup>1</sup> La Política de Discapacidad de la República de Panamá (2009), define la discapacidad como “toda limitación en la actividad y restricción en la participación que se origina en una deficiencia física, sensorial, psíquica y/o mental que afecta a una persona de forma permanente en su desenvolvimiento cotidiano y en su relación con el entorno físico y social”

un sistema nacional de rehabilitación que permita establecer y regular las normativas y protocolos de atención en materia de rehabilitación; (iv) diseño de un modelo de apoyo que brinde servicios de atención de salud y rehabilitación, así como capacitación al entorno familiar y comunitario, enfocado hacia las PcD que son beneficiarias de los diferentes programas de transferencia monetaria condicionada; (v) adquisición y distribución oportuna de ayudas técnicas de calidad.

- **Componente 3. Fortalecimiento de la educación y deporte inclusivos.** Este componente buscará mejorar la cobertura y calidad de la educación inclusiva mediante: (i) plan de capacitación en educación a la diversidad y ajustes razonables para docentes en servicio y directivos escolares; (ii) plan de acompañamiento y asesoramiento para la elaboración de ajustes razonables; (iii) habilitación de aulas de recursos para estudiantes con discapacidad y dificultades de aprendizaje en centros educativos y universidades de áreas rurales e indígenas; y (iv) actualización del marco normativo de educación a la diversidad simplificando la arquitectura institucional.
- **Componente 4. Apoyo a la capacidad jurídica y autonomía de las PcD.** Este componente contribuirá al fortalecimiento del esquema nacional de vida independiente. Se financiará: (i) el diseño e implementación del primer modelo de asistencia personal en Panamá para PcD con altas necesidades de apoyo, en calidad de piloto. El modelo incluirá la creación de un registro de asistentes personales, programa de formación de los asistentes personales, normas y estándares de calidad y un esquema de incentivos, y (ii) el desarrollo de orientaciones legales que favorezcan la capacidad jurídica de las PcD.

El análisis socioambiental proceso de debida diligencia de salvaguardias se centrará en las actividades de adecuación física y construcción de Centros Reintegra (Componente 2), ya que se considera que estas intervenciones tienen el potencial de generar impactos ambientales y sociales adversos.

Los Centros Reintegra fueron creados con el objetivo de prestar atención integral a personas con diferentes tipos de discapacidad física y sensorial, mediante un equipo multidisciplinario integrado por terapeuta de lenguaje, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, fonoaudiología, trabajador social y psicología. Hay actualmente ocho Centros de este tipo en el país, cada uno de ellos ubicado en un edificio independiente de unos 500 m<sup>2</sup>.

De los tres Centros Reintegra a rehabilitar por el Programa, dos se encuentran en la provincia de Veraguas - en las cabeceras de los corregimientos de Santa Fe y Las Palmas-, y otro en la provincia de Darién – cabecera del corregimiento de Metetí.

El nuevo Centro se construirá en la Comarca Ngäbe Buglé, en una localidad y terreno todavía por determinar. Se espera tener identificada la localidad próximamente.

### **Contexto Ambiental y Social**

La Comarca Ngäbe Buglé es una región indígena demarcada (Ver mapa en Apéndice 1). Según el Censo de 2010, tiene una población de 156.747 personas, de las cuales el 89% son de etnia Ngäbe, el 6% de etnia Buglé, y el resto pertenecen a otros grupos indígenas y no indígenas.

Las comarcas son divisiones político-administrativas autónomas en las cuales los pueblos indígenas tienen derechos exclusivos sobre la tierra y derecho al autogobierno según sus usos y costumbres. Las tierras dentro de la comarca son comunitarias. No existen títulos de propiedad privada, excepto aquellos anteriores a la conformación de la comarca; aunque sí existe el derecho de posesión (uso y usufructo), que se rige por el derecho consuetudinario. Las posesiones pueden ser individuales, familiares, de una comunidad o de un grupo de parentesco. Si para construir una infraestructura pública, la comunidad necesita afectar un predio sobre el que una persona o grupo tiene la posesión,

las comarcas tienen procedimientos en su derecho consuetudinario para compensar a las personas afectadas, bien sea con otro lote comunitario o con una indemnización.

La Comarca Ngäbe Buglé alberga diversas áreas protegidas: el Humedal de Importancia Internacional Damani Guariviara; el Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó; Bosque Protector Palo Seco; la Reserva Forestal Fortuna (ver mapa en Apéndice 1). El Centro a construir en la Comarca Ngäbe-Buglé no cuenta todavía con una ubicación definida, pero es de esperar que se ubique en un área con relativa densidad de población y no dentro de un hábitat natural o crítico. Por su lado, ninguno de los Centro Reintegra a rehabilitar se ubica en zonas de hábitat natural o crítico o sitios culturales.

Las áreas de intervención del Programa están expuestas a diversas amenazas naturales, especialmente movimientos sísmicos, deslizamientos e inundaciones por crecidas de ríos (Ver mapa en Apéndice 1). Sin embargo, dada la envergadura de las obras se considera que su exposición al riesgo será moderada.

### **Riesgos e Impactos de ESHS Potenciales Clave**

Con base en la información disponible, se anticipa que las obras a desarrollar por el Programa tienen el potencial de generar los siguientes impactos ambientales y sociales:

#### **Construcción de un Centro Reintegra en la Comarca Ngäbe Buglé, en un sitio por definir**

- Ambientales. Durante la fase de construcción: afectación de cobertura vegetal; ahuyentamiento de fauna; deterioro de la calidad del paisaje; emisión de polvo, partículas sólidas y contaminantes atmosféricos; generación de ruido y vibraciones; generación temporal y disposición de residuos sólidos y líquidos, incluyendo residuos peligrosos; y riesgo de contaminación de suelos con aceites, grasas y lubricantes. Durante la fase de operación: gestión de residuos y aguas residuales.
- Sociales y Seguridad y Salud: molestias a la comunidad del entorno por interrupción del tráfico; riesgo de conflictos entre la población y los trabajadores; riesgos para la salud de los trabajadores y la comunidad.
- Pueblos indígenas. El proyecto se desarrollará dentro de una comarca indígena, por lo cual todo el proceso de diseño y operación del proyecto debe hacerse desde una perspectiva de pertinencia cultural y respeto a los mecanismos de toma de decisiones de la propia comunidad en aspectos tales como: análisis de alternativas y selección del sitio de construcción, funcionalidad y servicios del Centro, perfiles profesionales del personal del Centro, estética y uso de materiales locales, evaluación de impactos socio-culturales y acuerdo social para el uso y mantenimiento de la infraestructura. El proyecto deberá obtener el consentimiento previo, libre e informado de las autoridades legítimas de la comunidad o comunidades participantes en el proyecto.
- Reasentamiento / Desplazamiento económico. En la Comarca la propiedad es comunal, por lo que el Centro deberá construirse en un predio donado por la comunidad. En el caso de que una persona o grupo familiar tenga la posesión de ese predio, se deberán seguir los procedimientos de compensación acordados por la propia comunidad según su derecho consuetudinario.

- **Riesgos de género.** En los pueblos Ngäbe y Buglé, la herencia, incluyendo la posesión de la tierra, se transmite de manera separada por canales de herencia entre hombres y herencia entre mujeres. Si es necesario realizar una compensación por el predio donado por la comunidad, se deberá evaluar quién ostenta la tenencia de esa tierra, sin dar por supuesto que es el “jefe” de la familia nuclear.
- **Riesgo de oposición al proyecto.** En la Comarca tiene una gran influencia el movimiento Mama Tadta, que con un mensaje de ortodoxia cultural y rechazo a las intervenciones “de fuera”, goza de gran aceptación especialmente entre la juventud Ngäbe. El apoyo de las autoridades comarcales formales es esencial para mitigar este riesgo y lograr el consentimiento para la ejecución de proyectos en la Comarca Ngäbe-Buglé.

#### Rehabilitación de los Centro Reintegra de Santa Fe, Las Palmas y Metetí

- **Ambientales:** emisión de polvo, partículas sólidas y contaminantes atmosféricos; generación de ruido y vibraciones; generación temporal de residuos sólidos y líquidos; riesgo de contaminación de suelos con aceites, grasas y lubricantes; e inadecuada gestión de residuos procedentes de construcción y demolición, incluyendo materiales peligrosos como asbestos.
- **Sociales y Seguridad y Salud:** molestias a la comunidad del entorno por disrupción del tráfico vehicular; riesgo de conflictos entre la población y los trabajadores; riesgos de accidentes de los trabajadores de la obra, las personas de la comunidad y el personal y usuarios de los Centros.

### **Vacios de Información y Estrategia de Análisis**

De acuerdo con la directiva B.3 “Preevaluación y Clasificación” la operación se ha clasificado como Categoría B, ya que las obras de infraestructura previstas podrían generar impactos ambientales y sociales negativos localizados y de corta duración, para los cuales se dispone de medidas de mitigación conocidas. A fin de cumplir con las políticas del Banco y mitigar los potenciales impactos y riesgos identificados, durante la preparación de la operación se desarrollará un Análisis Ambiental y Social (AAS) y su respectivo Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), incluyendo como mínimo:

#### Proyecto de construcción de un Centro Reintegra en la Comarca Ngäbe Buglé

- Diagnóstico ambiental y socioeconómico del área seleccionada para la construcción del Centro
- Análisis Sociocultural (ASC), con énfasis en la comprensión cultural de la discapacidad; usos culturales del territorio; normas consuetudinarias relativas a la compensación por pérdida de derecho de usufructo sobre la tierra; roles y relaciones de género; gobernabilidad; y mecanismos de toma de decisión y solución de conflictos.
- Evaluación de impactos sociales y ambientales, tanto positivos como negativos, del proyecto, distinguiendo entre los directos, indirectos y acumulativos, para las etapas de construcción y operación.
- Evaluación de la capacidad del Organismo Ejecutor para evaluar y gestionar adecuadamente los aspectos de ESHS del Programa y definición de medidas su fortalecimiento, si es necesario.
- Medidas de gestión para potenciar los impactos positivos y mitigar los negativos. De manera preliminar se consideran:



- Plan de consultas socioculturalmente adecuadas dirigidas a la obtención del consentimiento previo, libre e informado
- Propuesta de criterios de pertinencia cultural, tanto aplicados la infraestructura del Centro (ubicación, materiales de construcción, estética, acuerdos sociales para el uso y mantenimiento de la infraestructura) como a su funcionamiento (servicios socioculturalmente adecuados, perfiles profesionales, normas de funcionamiento)
- Mecanismo de gestión de quejas y reclamos
- Acuerdos de contratación de mano de obra local, tanto para la construcción como para la gestión y operación del Centro
- Plan de rescate y reubicación de flora y fauna, de ser necesario
- Plan de seguridad y salud ocupacional y comunitaria para la fase de construcción
- Plan de respuesta a emergencias para las fases de construcción y operación
- Plan de gestión de residuos sólidos para la fase de construcción y operación
- Plan de manejo de aguas servidas para la fase de construcción y operación

#### Proyectos de rehabilitación de Centros Reintegra

- Evaluación de impactos sociales y ambientales de las obras
- Medidas de gestión, incluyendo:
  - Plan de gestión de residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos
  - Plan de seguridad y salud ocupacional durante las obras para trabajadores, comunidad y personal y usuarios del Centro
  - Plan de continuidad de servicio durante la fase de construcción
  - Plan de respuesta a emergencias

#### **Consultas**

El AAS/PGAS se consultará con la población potencialmente afectada y otras partes interesadas. Las consultas deberán ser socioculturalmente adecuadas y sensibles al género, siguiendo los lineamientos y metodología definidas en el PGAS. El proyecto de la Comarca deberá obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades involucradas. Este consentimiento deberá ser por escrito.

Dependiendo de la evolución de la epidemia de coronavirus, podría ser necesario contemplar estrategias de consulta que no impliquen reuniones presenciales ni desplazamientos.

#### **Acceso a la información**

Siguiendo la Política de Acceso a la Información OP-102, una versión “publicable” del AAS/PGAS deberá estar disponible en la página web del Banco antes de la misión de análisis.

#### **Cronograma provisional**

Se contratará un consultor o consultores para desarrollar el AAS/PGAS del Programa, incluyendo el Análisis Sociocultural, por un período estimado de 2 meses. Dada la actual situación de emergencia por el coronavirus, se debe coordinar con el Ejecutor y el equipo del BID el alcance y metodología de recogida de información de los estudios y las consultas, así como las fechas de inicio. En su cronograma actual, se prevé que la misión de análisis se lleve a cabo en el mes de julio de 2020.

#### **Oportunidades para adicionalidad del BID**

El Programa ofrece oportunidades para la integración transversal del enfoque de diversidad, incluido de género y pueblos indígenas, en todas sus intervenciones.

<b>Cuadro Anexo: Operación bajo Cumplimiento de Políticas de Salvaguardias del BID</b>
--

Ver Anexo 1: Tabla cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID.
---

<b>Apéndices Adicionales</b>
------------------------------

Ver Apéndice 1: Mapas.
------------------------

**Anexo 1: Tabla cumplimiento de la Operación con las Políticas de Salvaguardias del BID**

<b>Políticas / Directrices</b>	<b>Política / Directriz aplicable?</b>	<b>Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes</b>	<b>Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis</b>
<b>OP-703 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias</b>			
B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales	Sí	El programa debe cumplir con las leyes y regulaciones socioambientales nacionales y locales relevantes	El AAS evaluará el marco regulatorio e institucional social y ambiental relevante para el Programa y definirá las medidas para garantizar su cumplimiento.
B.3 Preevaluación y Clasificación	Sí	Con base en la información disponible, el Programa ha sido clasificado como de Categoría “B”, ya que se prevé que los impactos ambientales y sociales negativos generados durante la construcción y operación de las obras serán de mediana magnitud, localizados y reversibles, existiendo medidas de control y mitigación efectivas	N/A
B.4 Otros Factores de Riesgo	Sí	Se necesita más información. Se evaluará la capacidad de la agencia ejecutora en cuanto a aspectos socioambientales.	El AAS/PGAS evaluará la capacidad del Ejecutor para gestionar los riesgos e impactos socioambientales identificados y propondrá medidas de fortalecimiento, según sea necesario.
B.5 Requisitos de Evaluación y Planes Ambientales y Sociales (incluyendo un Plan de Restauración de Medios de Subsistencia)	Sí	Como parte de la preparación de la operación se elaborará un Análisis Ambiental y Social (AAS), incluyendo un Análisis Sociocultural (ASC), y su respectivo Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). No se prevé impactos por desplazamiento físico. En caso de desplazamiento económico, las compensaciones se ajustarán al derecho consuetudinario.	Antes de la misión de análisis, se preparará y publicará en la página web del Banco un AAS/PGAS donde se identifiquen y evalúen los posibles impactos y riesgos socioambientales asociados al proyecto y se definan medidas de prevención y/o mitigación.
B.6 Consultas	Sí	Las operaciones de categoría B requieren al menos una consulta con las partes afectadas e interesadas durante la preparación.	El AAS/PGAS incluirá un Plan de Consultas que identifique a la población afectada y otras partes interesadas y proponga una metodología para llevar a cabo consultas socioculturalmente adecuadas y

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
			<p>significativas en un contexto de restricción de movimientos y contacto por la epidemia de coronavirus. Para el proyecto a desarrollar en la Comarca Ngábe-Buglé se requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades involucradas.</p> <p>Los informes del proceso de consulta se publicarán en la página web del Banco antes de OPC.</p> <p>El AAS/PGAS incluirá un mecanismo de gestión de reclamos.</p>
B.7 Supervisión y Cumplimiento	Sí	<p>El Banco supervisará el cumplimiento de los requisitos socioambientales establecidos en el AAS/PGAS, el contrato de préstamo y las políticas de salvaguardias del BID.</p> <p>Igualmente, se espera que el Ejecutor implemente un programa de monitoreo de impactos.</p>	<p>El PGAS incluirá un sistema de monitoreo socioambiental, con indicadores específicos que serán monitoreados por el Ejecutor.</p> <p>El Ejecutor entregará informes de cumplimiento socioambiental como parte de los informes de progreso del programa.</p> <p>El Banco supervisará el cumplimiento de los requisitos socioambientales acordados en el contrato de préstamo.</p>
B.8 Impactos Transfronterizos	N/A	No se prevén impactos transfronterizos	N/A
B.9 Hábitats Naturales	N/A	Los Centros a rehabilitar no se encuentran en áreas próximas a hábitats naturales críticos. El Centro de la Comarca Ngábe-Buglé no cuenta todavía con una ubicación definida, pero es de esperar que se ubique en un área con relativa densidad de	El AAS analizará la presencia de hábitats naturales o críticos en el área del proyecto y, de ser el caso, definirá medidas de acuerdo con la jerarquía de mitigación.

<b>Políticas / Directrices</b>	<b>Política / Directriz aplicable?</b>	<b>Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes</b>	<b>Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis</b>
		población y no dentro de un hábitat natural o crítico (información a corroborar por el AAS/PGAS).	
B.9 Especies Invasoras	N/A	El programa no introducirá especies invasoras.	N/A
B.9 Sitios Culturales	No	No se anticipa que ninguna de las obras se desarrolle en sitios culturales, incluidos sitios de significación espiritual para el pueblo ngäbe o buglé. Sin embargo, durante los trabajos de remoción del suelo podrían producirse hallazgos fortuitos.	El PGAS incluirá un protocolo de hallazgos fortuitos.
B.10 Materiales Peligrosos	Sí	Durante la ejecución de las obras se utilizarán materiales peligrosos como gasolina, combustible, diésel, aceite y lubricantes. Igualmente, en las obras de readecuación física podrían aparecer materiales como asbestos.	El PGAS incluirá los planes y medidas necesarias para la gestión y disposición final de los desechos peligrosos generados por el programa.
B.11 Prevención y Reducción de la Contaminación	Sí	Durante las obras de construcción se generará polvo, ruido, contaminantes atmosféricos, aguas residuales y desechos sólidos.	El PGAS incluirá los planes y medidas necesarias para la gestión y disposición final de efluentes y otros desechos generados por el programa que puedan significar fuentes de contaminación.
B.12 Proyectos en Construcción	N/A	No es un programa con proyectos en construcción.	N/A
B.13 Préstamos de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo	N/A	No es un préstamo de Política e Instrumentos Flexibles de Préstamo.	N/A
B.14 Préstamos Multifase o Repetidos	N/A	No es un préstamo Multifase o Repetidos.	N/A
B.15 Operaciones de Cofinanciamiento	N/A	La operación no será cofinanciada.	N/A
B.16 Sistemas Nacionales	N/A	No se utilizarán los sistemas nacionales de salvaguarda sino los del Banco	N/A

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
B.17 Adquisiciones	Sí	Los contratos de los contratistas incluirán referencias a los requisitos de ESHS del BID.	Los contratos de los contratistas incluirán referencias a los requisitos de ESHS del BID.
<b>OP-704 Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales</b>			
A.2 Análisis y gestión de escenario de riesgos tipo 2.	No	Dado el tipo de infraestructura a financiar no se anticipa que el proyecto contribuya a exacerbar el riesgo para vida humana, el ambiente y el propio proyecto.	N/A
A.2 Gestión de contingencia (Plan de respuesta a emergencias, plan de seguridad y salud de la comunidad, plan de higiene y seguridad ocupacional).	Sí	La operación ha sido clasificada como de riesgo tipo 1 moderado ante desastres.	El EAS/PGAS evaluará el riesgo de desastres y determinará los planes y medidas de mitigación necesarias, incluyendo un plan de respuesta a emergencias.
<b>OP-710 Política Operativa sobre Reasentamiento Involuntario</b>			
Minimización del Reasentamiento	N/A	En estos momentos no se ha definido todavía la ubicación del Centro de la Comarca Ngäbe-Buglé. Sin embargo, dada la baja densidad de población en el territorio, no se anticipa la necesidad de desplazar población para construir el Centro (infraestructura que ocupa unos 500 m <sup>2</sup> )	N/A
Consultas del Plan de Reasentamiento			
Análisis del Riesgo de Empobrecimiento			
Requerimiento para el Plan de Reasentamiento y/o Marco de Reasentamiento			
Requerimiento de Programa de			

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
Restauración del Modo de Vida			
Consentimiento (Pueblos Indígenas y otras Minorías Étnicas Rurales)			
OP-765 Política Operativa sobre Pueblos Indígenas			
Requerimiento de Evaluación Sociocultural	Sí	La Comarca Gnäbe-Buglé es territorio autónomo indígena, por lo cual el proyecto de construcción de un Centro Reintegra en este territorio requiere la realización de un análisis sociocultural (ASC).	Se realizará un ASC con énfasis en la comprensión cultural de la discapacidad; usos culturales del territorio; normas consuetudinarias relativas a la compensación por pérdida de derecho de usufructo sobre la tierra; roles y relaciones de género; gobernabilidad; y mecanismos de toma de decisión y solución de conflictos; y se evaluarán los posibles impactos sobre el territorio, patrimonio e identidad cultural de la comunidad indígena.
Negociaciones de Buena Fe y documentación adecuada	Sí	Se deberán llevar a cabo procesos de consulta y negociaciones de buena fe tempranos y socioculturalmente adecuados encaminados a identificar y evaluar los beneficios e impactos potenciales sobre las comunidades Ngäbe-Buglé involucradas en el proyecto, y obtener su consentimiento.	Durante la preparación de la operación se desarrollarán procesos de consulta y negociación de buena fe socioculturalmente adecuados encaminados a obtener el acuerdo de las comunidades involucradas en el proyecto. La negociación abordará como mínimo aspectos relativos a la ubicación del Centro; alternativas de diseño; acuerdos de uso y mantenimiento; características del servicio; y perfiles profesionales del personal del Centro. El proceso de negociación deberá ser documentado por escrito.

Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
Acuerdos con Pueblos Indígenas Afectados	Sí	El proyecto en la Comarca Ngäbe-Buglé deberá obtener el consentimiento de las comunidades involucradas.	El proyecto en la Comarca Ngäbe-Buglé requerirá, para su aprobación por el Banco, evidencia de contar con el acuerdo de las comunidades involucradas y sus representantes legítimos.
Requerimiento de Plan o Marco de Compensación y Desarrollo de Pueblos Indígenas	N/A	No se anticipa que el Programa genere impactos adversos significativos sobre pueblos indígenas.	N/A
Cuestiones Discriminatorias	N/A	No se anticipa un riesgo de discriminación en el acceso al Programa por razones étnicas	N/A
Impactos Transfronterizos	N/A	Si bien los pueblos ngäbe y buglé se extienden por Panamá y Costa Rica con una alta movilidad transfronteriza, el Centro de la Comarca Ngäbe-Buglé se construirá dentro del territorio panameño y no se anticipan impactos negativos de carácter transfronterizo.	N/A
Impactos sobre Pueblos Indígenas Aislados	N/A	El Programa no involucra a pueblos indígenas en aislamiento voluntario	N/A
<b>OP-761 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo</b>			
Consulta y participación efectiva de mujeres y hombres	Sí	En los procesos de consulta se buscará la inclusión equitativa de las mujeres y los hombres de una manera socioculturalmente adecuada.	El Plan de Consultas incluido en el AAS, propondrán metodologías sensibles al género para promover la participación equitativa de mujeres y hombres durante la preparación y ejecución del Programa. El informe de consulta deberá dar cuenta de las medidas tomadas para promoverla y desagregar la información por género.
Aplicación del análisis de riesgo y salvaguardias.	Sí	Dada la naturaleza del Programa no se esperan impactos adversos o riesgos de exclusión por razones de género. No obstante, este análisis	El EAS/PGAS analizará el riesgo de exclusión por razones o impactos adversos por razones de género, y en caso de



Políticas / Directrices	Política / Directriz aplicable?	Fundamentos de Políticas/Directrices Pertinentes	Acciones Requeridas durante Preparación y Análisis
		preliminar deberá ser corroborado durante la debida diligencia.	identificarlos, definirá medidas de mitigación acordes.
<b>OP-102 Política de Acceso a la Información</b>			
Divulgación de Evaluaciones Ambientales y Sociales Previo a la Misión de Análisis, QRR, OPC y envío de los documentos al Directorio	Sí	Es compromiso del Banco ser transparente en todas sus actividades, procurando para ello maximizar el acceso a los documentos e información generados en su poder	Antes de la misión de análisis se pondrá a disposición del público en la página web del Banco la versión apta para publicación del AAS/PGAS. La versión final, incluyendo los informes de consulta, será publicada antes de OPC.
Disposiciones para la Divulgación de Documentos Ambientales y Sociales durante la Implementación del Proyecto	Sí		En caso de que se generen nuevos documentos ambientales y sociales relevantes durante la implementación del Programa, se pondrán a disposición del público en la página web del Banco.

## APÉNDICE 1. Mapas

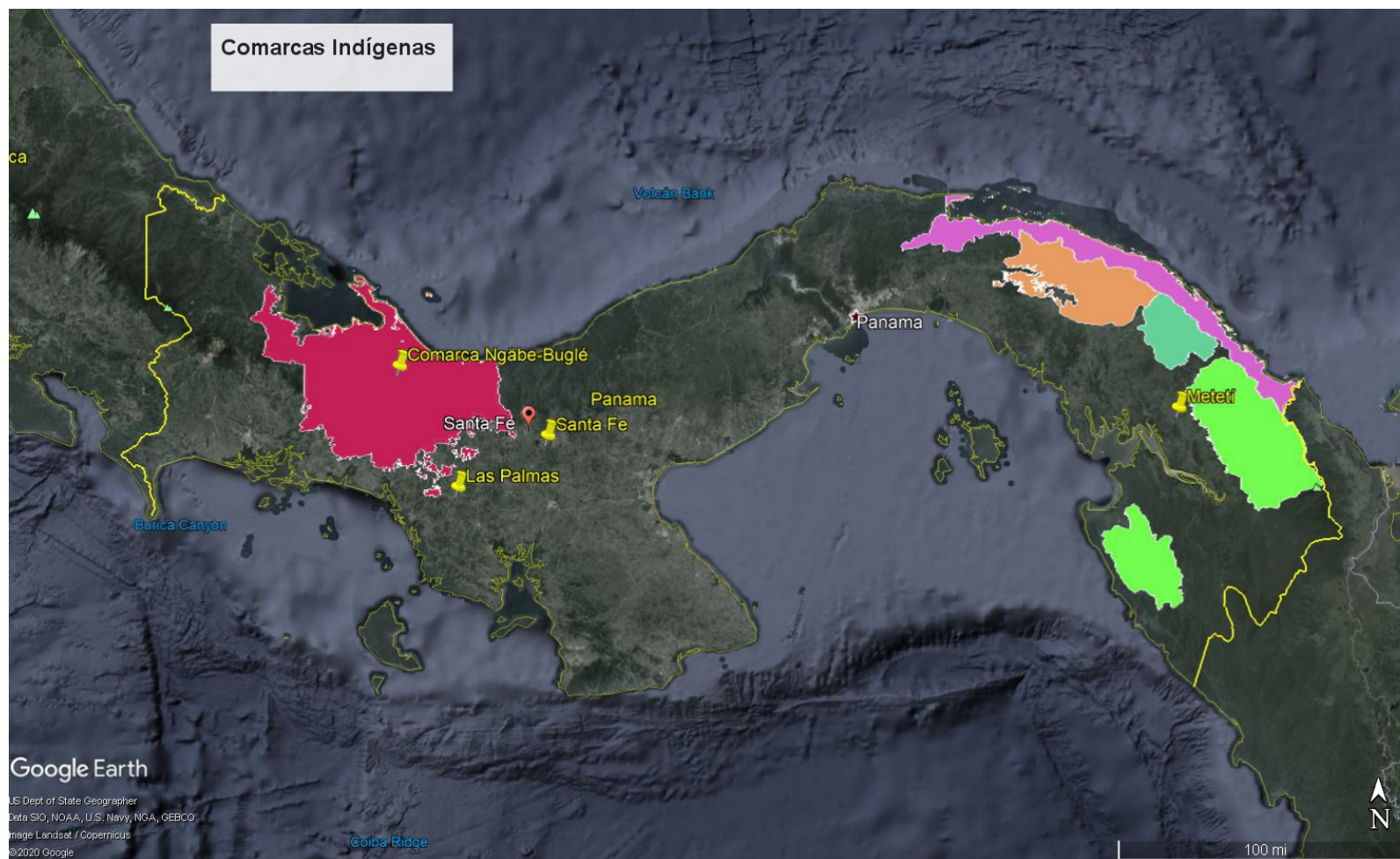
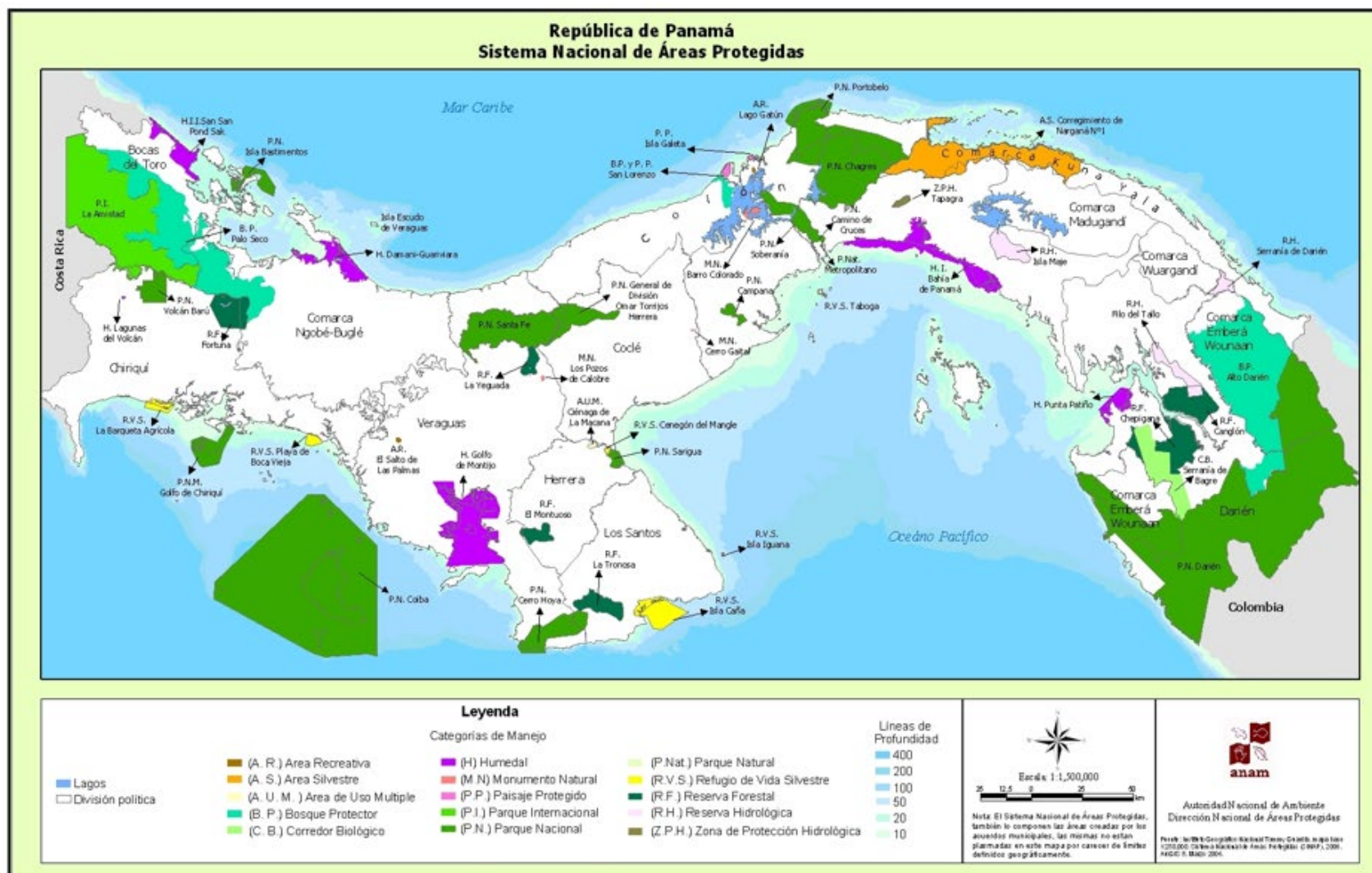


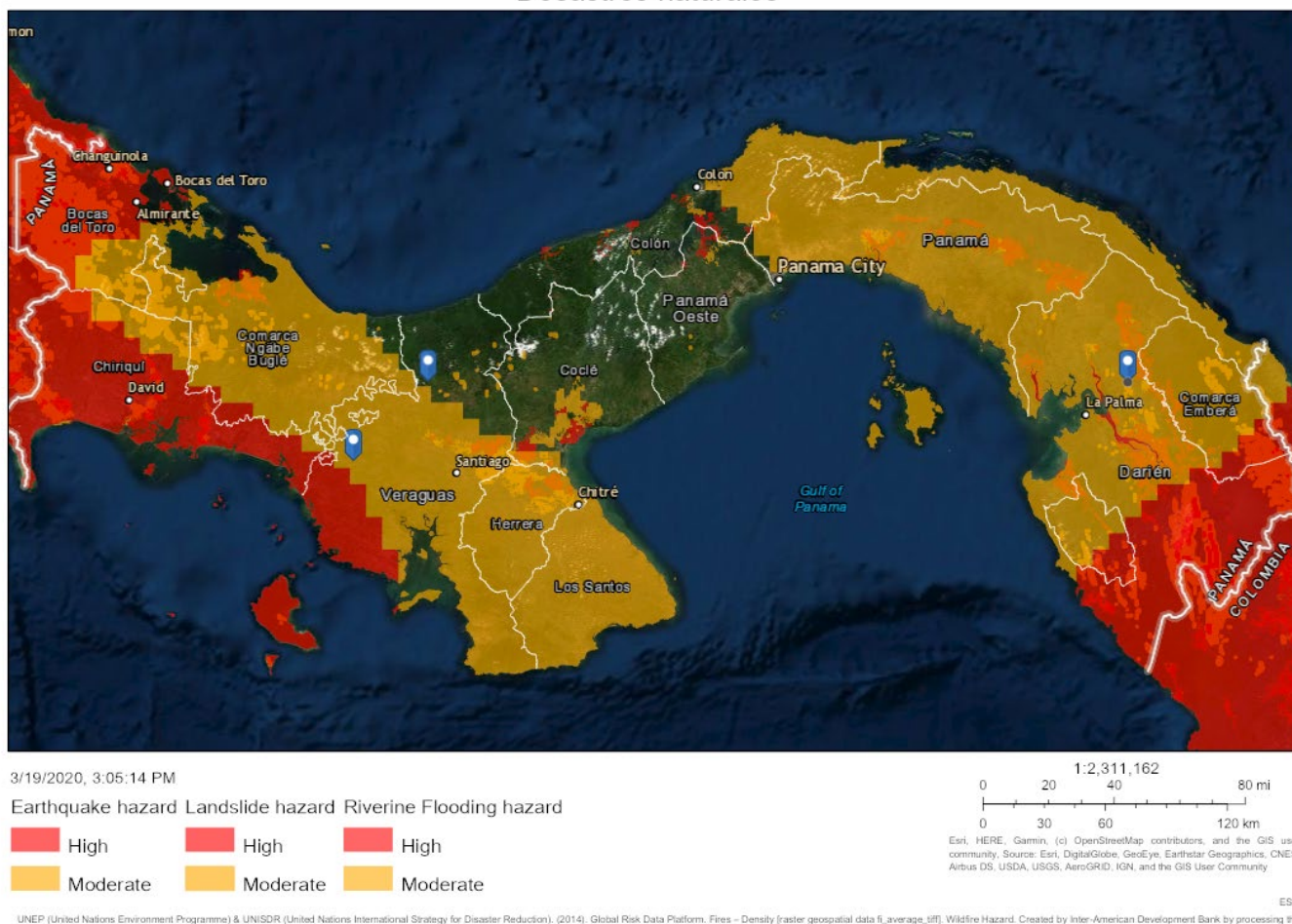
Figura 1. Mapa de comarcas indígenas



**Figura 2. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Fuente: ANAM**



### Desastres naturales



**Figura 3. Mapa de principales amenazas por desastres naturales**

### ÍNDICE DE LAS ACTIVIDADES SECTORIALES PROPUESTAS O COMPLETADAS

TEMAS	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	REFERENCIA
Diagnóstico	Centro de Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (2019). Estudio sobre la educación inclusiva en Panamá	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	BID, World Economic Forum y Gobierno Nacional de la República de Panamá (2018). Diagnóstico y Plan de Acción para la Iniciativa de Paridad de Género en Panamá.	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	Naciones Unidas (2017). Observaciones finales sobre el informe inicial de Panamá. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	Gaceta Oficial No. 25708 del 11 de enero de 2017. Ley No. 4 que crea el Programa Nacional del Tamizaje Neonatal y dicta otras disposiciones.	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	Senadis y Grupo para la Educación y el Manejo Ambiental Sostenible – GEMA (2015). Estudio de caracterización de las escuelas inclusivas en Panamá	Completado	Documento de trabajo interno
	Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 que levanta información sobre las personas con discapacidad (PcD) conforme el método de la escala de Washington - apropiada para medir la discapacidad en los censos de población- por su alineación con la Convención de los Derechos de las PcD.	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	Gaceta Oficial Digital No. 25832 del 11 de julio de 2007. Ley 25 por la cual se aprueban La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptados en Nueva York por la Asamblea de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006.	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	Gaceta Oficial Digital No. 25824 del 29 de junio de 2007. Ley No. 23 que crea la Secretaría Nacional de Discapacidad	Completado	<a href="#">Enlace</a>

TEMAS	DESCRIPCIÓN	ESTATUS	REFERENCIA
	Grupo para la Educación y Manejo Ambiental Sostenible - GEMA (2006). Estudio Sobre la Prevalencia y Caracterización de la Discapacidad en la República de Panamá. Informe realizado en base a la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad PENDIS 2006	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	Gaceta Oficial No. 25176 del 15 de noviembre de 2004. Constitución Política de la República de Panamá. Artículo 19	Completado	<a href="#">Enlace</a>
	Gaceta Oficial No. 23876 el 31 de agosto de 1999. Ley No. 42 por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad	Completado	<a href="#">Enlace</a>
Opciones Técnicas y Diseño	Panamá Estrategia de País del BID 2020-2024	En preparación	En preparación
	BID (2017). Documento de Marco Sectorial de Protección Social y Pobreza	Completado	<a href="#">Enlace</a>
Análisis del Costo del Proyecto y su Viabilidad Económica	Análisis costo-beneficio de las principales inversiones del programa	En preparación	En preparación

# CONFIDENCIAL

<sup>1</sup> La información contenida en este Anexo es de carácter deliberativo, y por lo tanto confidencial, de conformidad con la excepción relativa a “Información Deliberativa” contemplada en el párrafo 4.1 (g) de la “Política de Acceso al Información” del Banco (Documento GN-1831-28).